RIBUNAL UNITARIO AGRARIO

RESOLUCIÓN dictada en el expediente 645/2016, relativo a la incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado Santa María del Oro, municipio del mismo nombre, Estado de Nayarit.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario.- Secretaría de Acuerdos.- Distrito 56 Tepic.

Visto para dictar resolución en el expediente citado al rubro, y

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, los señores BERNABÉ RAMOS GARCÍA, JUAN MARTÍN ARCADIA CAMBERO y MA. PRISCILA VARGAS MILIAN, presidente, secretario y tesorera del comisariado ejidal del núcleo denominado "Santa María del Oro", Municipio de Santa María del Oro, Nayarit, en la vía de jurisdicción voluntaria, solicitaron las siguientes:

"PRESTACIONES:

A).- La declaración judicial de haber operado a favor de nuestro ejido, la figura jurídica de incorporación de tierras al régimen ejidal, de una superficie de 363-97-64.391 (trescientas sesenta y tres hectáreas, noventa y siete áreas, sesenta y cuatro punto tres novena y un centiáreas).

B).- Se reconozca a nuestro representado ejido Santa María del Oro, municipio de Santa María del Oro; Nayarit, la propiedad de una superficie de 363-97-64.391 (trescientas sesenta y tres hectáreas, noventa y siete áreas, sesenta y cuatro punto tres novena y un centiáreas), con todos los derechos y obligaciones que nos confiere la ley de la materia.

C).- Se ordene por sentencia judicial en términos del artículo 9 de la Ley Agraria, la calidad de propietario de la superficie apuntada en las prestaciones preindicadas anteriormente.

D).- A fin de que surta sus efectos legales correspondientes, solicitamos se gire oficio con los insertos necesarios al C. Delegado del Registro Agrario Nacional en la ciudad de Tepic Estado de Nayarit; para el efecto de que se sirva inscribir y registrar la sentencia que en derecho corresponda". (Sic).

A manera de hechos relataron lo siguiente:

"HECHOS

1.- Que el núcleo ejidal que representamos fue dotado con una superficie de 2685-00.00 hectáreas, por Resolución Presidencial de fecha 17 de diciembre del año 1925 habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 1926 habiéndose ejecutado mediante la respectiva acta el 14 de mayo del año de 1927.

2.- Nuestro ejido fue beneficiado con una superficie de 2695-00.00 hectáreas, en vía de ampliación mediante resolución presidencial de fecha 13 de junio de 1951 misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de noviembre del año de 1951, habiéndose ejecutado con fecha el 3 de abril del año 2006.

3.- Con fecha 2 de junio del año 1996, nuestro núcleo ejidal incorporó sus tierras al programa de certificación de derechos ejidales (PROCEDE), habiéndose delimitado una superficie real ejidal de 5722-29-75.410 hectáreas, correspondiendo al área parcelada una superficie de 2696-10-21.468 hectáreas, 2849-66-15.778 hectáreas a terrenos de uso común; ríos, arroyos y cuerpos de agua 76-54-90.155 hectáreas, asentamiento humano en una superficie de 54-68-15.989 hectáreas; y 39-92-78.551 hectáreas infraestructura.

4.- Como resultado de las mediciones del programa PROCEDE, nuestro núcleo ejidal resultó con **excedencias** en una superficie de 363-97-64.391 hectáreas, es decir, terrenos fuera de los linderos señalados en la carpeta básica que amparan la propiedad de las tierras entregadas en dotación a nuestro ejido, considerando que tal diferencia obedece a que en la fecha que fue ejecutada la acción de dotación (14 de febrero de 1927), se utilizaron instrumentos rudimentarios para la medición de los terrenos, y en la actualidad dichos medios son de mayor precisión, es por ello que mediante la presente solicitamos sean incorporadas a nuestro ejido.

5.- Acompañamos plano general que ampara la superficie de 363-97-64.391 hectáreas, de terrenos en posesión del núcleo que representamos y pretendemos sean incorporadas al patrimonio ejidal, por ello indicamos medidas y colindancias:

Al noreste 2869.263 mts. En línea quebrada con ejido Real de Acuitapilco

Al sureste 893.367 mts. En línea quebrada con Merced Gómez Cambero

Al sur 2516.126 mts. En línea quebrada con Antonio Sánchez Sánchez

Al suroeste 742.03 mts. En línea quebrada con ejido Zapotanito

Al oeste 762.700 mts. Con ejido Santa María del Oro; 857.334 mts. En línea quebrada con Concepción García Duarte

Al noroeste 298.555 en línea quebrada con María Cambero Fletes; 432.956 mts. En línea quebrada con Antonio García cambero; 281.458 mts. Con Praxedis García

Acevedo; 930.009 mts. En línea quebrada con Leopoldo Parra Arjona; 136.492 mts. Con Eleodoro Flores.

6.- A fin de respetar la garantía de audiencia y debido proceso, indicamos el nombre y domicilio de los colindantes de la superficie de terreno identificada en el párrafo anterior, ello para efecto de notificar el inicio de las presentes diligencias.

✓ Ejido Real de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, puede ser emplazo en su domicilio conocido.

✓ Merced Gómez Aguilar, puede ser emplazado en calle Juárez 23 en Santa María del Oro, Nayarit.

✓ Ricardo Herrera, quien puede ser emplazado en calle

✓ Ejido Zapotanito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, puede ser emplazo en su domicilio conocido.

✓ José Manuel García, puede ser emplazado en calle Morelos 79, en Santa María del Oro, Nayarit.

✓ Antonio García Cambero, puede ser emplazado en calle Juárez 65, en Santa María del Oro, Nayarit.

✓ Praxedis García Acevedo; puede ser emplazado en calle Allende 51, en Santa María del Oro, Nayarit.

✓ Leopoldo Parra Arjona, puede ser emplazado en calle Hidalgo 47, en Santa María del Oro, Nayarit.

✓ Efrén Flores García, puede ser emplazado en calle Privada Niños Héroes s/n, en Santa María del Oro, Nayarit.

7.- Agregamos que, a pesar de tener la posesión y explotación de los terrenos de referencia, sin que exista conflicto alguno, carecemos de documentación con la que podamos demostrar la tenencia de dichos terrenos, y ello ocasiona problemas al momento de llevar a cabo trámites administrativos ante las dependencias de los tres niveles de gobierno, pues se nos exigen documentos que demuestren legalmente la propiedad y posesión de los mismos; de ahí que al carecer de la documentación idónea comparecemos ante este Tribunal Unitario Agrario en la búsqueda del dictado de una resolución en la que se reconozca al núcleo que representamos como propietario.

6.- Finalmente, acompañamos acta de asamblea general de ejidatarios celebrada el pasado 7 de agosto, en la cual el máximo órgano de representación ejidal otorgó su anuencia para incorporar los terrenos achurados al régimen ejidal, autorizándonos a llevar a cabo las acciones legales necesarias". (Sic).

SEGUNDO. Por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la solicitud, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia, y se ordenó citar a los ejidos "Real de Acuitapilco" y "Zapotanito", municipio de Santa María del Oro, Nayarit, así como a los señores MERCED GÓMEZ AGUILAR, RICARDO HERRERA, MARÍA CAMBERO FLETES, JOSÉ MANUEL GARCÍA, PRAXEDIS GARCÍA ACEVALO, LEOPOLDO PARRA ARJONA y EFRÉN FLORES GARCÍA, en calidad de colindante de los terrenos cuya incorporación al régimen ejidal se pretende (fojas 170 y 171).

TERCERO. Notificaciones.

Los núcleos agrarios y personas físicas antes mencionadas, fueron notificados de la radicación del caso y que la audiencia tendría lugar el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, como consta de la foja 172 a 186.

CUARTO. Desahogo de audiencia.

El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, a la audiencia compareció el comisariado ejidal del poblado promovente, acompañado de su respectivo abogado.

Por el núcleo agrario denominado "Zapotanito" municipio de Santa María del Oro, Nayarit, sólo asistieron el presidente y la tesorera.

En calidad de colindante, asistió el señor LEOPOLDO PARRA ARJONA, con su respectivo abogado.

Se hizo constar la incomparecencia del núcleo agrario denominado "Real de Acuitapilco", municipio de Santa María del Oro, Nayarit, así como de los señores MERCED GÓMEZ AGUILAR, RICARDO HERRERA, MARÍA CAMBERO FLETES, JOSÉ MANUEL GARCÍA, PRAXEDIS GARCÍA ACEVALO, y EFRÉN FLORES GARCÍA.

Enseguida el comisariado ejidal promovente, ratificó su solicitud y medios de prueba ofrecidos.

El señor LEOPOLDO PARRA ARJONA, manifestó que no tiene problemas con las medidas, colindancias y linderos con terrenos que pertenecen al ejido promovente, por lo que hace saber su conformidad con lo aquí pretendido.

Con base en lo anterior, el tribunal fijó los puntos que se atenderían en el dictado de la resolución.

Luego admitió los medios de prueba que únicamente ofreció el ejido promovente.

QUINTO. Alegatos.

Una vez desahogados los medios de prueba ofrecidos y admitidos al núcleo agrario promovente, se abrió el periodo de alegatos y se concedió a las partes el plazo de tres días hábiles para que los formularan por escrito (fojas 187 a 194).

SEXTO. Turno para resolución.

En virtud de que las partes no formularon sus alegatos en el plazo concedido para ello, por acuerdo de veinte de enero, se turnó el asunto a la secretaría de estudio y cuenta, para que elaborara el proyecto de resolución, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Tribunal Unitario Agrario declara que tiene competencia para conocer y resolver este asunto, con fundamento en el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 165 y 18, fracción X, de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, respectivamente.

SEGUNDO. Por cuestión de método conviene tener presente que la pretensión del ejido promovente se encausó en la vía de jurisdicción voluntaria.

En términos del artículo 165 de la Ley Agraria, los tribunales agrarios conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.

Como el artículo 167 de la Ley Agraria prevé la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles, entonces es indispensable tener presente que el artículo 530 del citado ordenamiento indica que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

Por otra parte, la doctrina jurídica mexicana y múltiples criterios del Poder Judicial de la Federación, coinciden en que las resoluciones que se dictan en vía de jurisdicción voluntaria, no son constitutivas de derechos, no alcanzan la categoría de sentencia ejecutoriada y, por tanto, jamás logran la autoridad de cosa juzgada, pues sólo son declarativas de una situación de hecho o de derecho determinada.

Se establecen las premisas legales que anteceden, porque la pretensión de los promoventes del caso que nos ocupa, consiste básicamente en que este tribunal declare que el núcleo que representan sea propietario de 8-14-51 hectáreas, con base en los hechos que narraron en su de solicitud.

Ahora bien, en el artículo 27, fracción VII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley Agraria dice que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título.

Igualmente es de tomarse en cuenta que el artículo 187 de la Ley Agraria mandata que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; en tanto que el 189 del mismo ordenamiento prevé que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimen debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.

Lo anterior significa que los promotores del caso tienen la carga de demostrar los hechos que narraron en su solicitud; y que este tribunal debe apreciar los medios de prueba en los términos antes indicados.

Así pues, para demostrar sus pretensiones, el núcleo agrario promovente trajo el procedimiento los siguientes medios de prueba:

1. Copias certificadas por el licenciado OSCAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ, notario público número 4, con ejercicio y residencia en Ixtlán del Río, Nayarit, de las credenciales números 14040, 14041 y 14042, expedidas por la delegación del Registro Agrario Nacional, con las que se demuestra el carácter de presidente, secretario y tesorera del comisariado ejidal del núcleo agrario denominado "Santa María del Oro", de los señores BERNABÉ RAMOS GARCÍA, JUAN MARTÍN ARCADIA CAMBERO y MA. PRISCILIA VARGAS MILIÁN, con vigencia del cargo hasta el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 7 y 8).

Estos documentos públicos resultan útiles en términos del artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, pues las personas cuyos nombres antes se mencionaron, a la fecha de presentación de la solicitud que fue el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, efectivamente, eran los representantes legales del referido núcleo agrario.

2. Copia certificada por el Registro Agrario Nacional de la resolución presidencial dictada el diecisiete de diciembre de mil novecientos veinticinco (fojas 9 a la 18).

De su estudio se sabe que en la citada fecha, el Presidente de la República Mexicana, estimó procedente la dotación de 2,490-00-00 hectáreas, en favor de campesinos solicitantes de tierras del poblado denominado "Santa María del Oro", Nayarit.

3. Copia certificada por el Registro Agrario Nacional de un documento fechado el once de febrero de mil novecientos veintiséis (fojas 19 a 23).

De su estudio se sabe que en esa fecha, un representante de la Comisión Nacional Agraria, se presentó ante los integrantes del Comité Administrativo Agrario y del Presidente Municipal de Santa María del Oro, y procedió a ejecutar la resolución presidencial de diecisiete de diciembre de mil novecientos veinticinco, ejecución que se hizo de manera parcial, pues fue hasta el catorce de mayo de mil novecientos veintisiete, cuando se concluyó en definitiva esa diligencia, como consta de la foja 24 a 28.

4. Copia certificada de una constancia de deslinde fechada el quince de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, firmada por el ingeniero MARCIANO MALDONADO MEDINA, comisionado de la delegación agraria en el estado de Nayarit (fojas 29 a 31).

A dicha constancia se acompañó la copia certificada por la citada autoridad agraria, del acta que se levantó el quince de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, para atender el pliego aclaratorio por cuanto a los terrenos del núcleo agrario que nos ocupa (fojas 32 a 37).

5. Copia certificada por la delegación del Registro Agrario Nacional, del Diario Oficial de la Federación, del veinticuatro de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno (fojas 38 a 40).

De su estudio se sabe que por resolución presidencial de trece de junio de mil novecientos cincuenta y uno, se decretó la ampliación del ejido Santa María del Oro, municipio de su mismo nombre, Nayarit, en 2,695-00-00 hectáreas.

6. Copia certificada por el Registro Agrario Nacional, del acta de deslinde relativa a la ejecución de la resolución presidencial antes mencionada, que tuvo lugar el veinte de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos (fojas 42 a 45).

Merece destacar que en esa ocasión no se concluyeron los trabajos de deslinde, por lo que fue necesario levantar otra acta de deslinde el doce de enero de mil novecientos cincuenta y tres, como consta en las fojas 46 y 47.

Estas dos actas fueron elaboradas por el ingeniero IGNACIO COCA BRIONES, comisionado por la delegación del Departamento Agrario en el estado de Nayarit, firmada por los integrantes del comisariado ejidal y vecinos del poblado de esas fechas.

7. Copia certificada de acta de asamblea de ejidatarios, por segunda convocatoria, que se llevó a cabo el dos de junio de mil novecientos noventa y seis (fojas 49 a 123).

De su estudio se sabe que el máximo órgano ejidal, como tema central trató la delimitación, destino y asignación de sus tierras, en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).

En ese evento se precisó que la superficie total del núcleo es de 5,722-29-75.410 hectáreas.

De ese total, el área parcelada es de 2,696-10-21.468 hectáreas. De uso común 2,849-66-15.778 hectáreas.

De ríos, arroyos y cuerpos de agua, 76-54-90.155 hectáreas.

De asentamientos humanos, 54-68-15.989 hectáreas y de infraestructura 39-92-78.551 hectáreas.

8. Copia certificada por la delegación del Registro Agrario Nacional, de acta de asamblea de ejidatarios, por segunda convocatoria, de veinticinco de junio de dos mil seis (fojas 124 a 163).

De su estudio se sabe que en esa asamblea una vez más se trató el tema de la delimitación, destino y asignación de tierras; e igualmente la aceptación y separación de ejidatarios, entendiéndose esta última como la suspensión de derechos corporativos de voz y voto de manera temporal.

En esa acta se apuntó que la superficie total del núcleo agrario es de 5,722-29-75.410 hectáreas.

9. En la foja 164 obra plano aprobado por la delegación del Registro Agrario Nacional, que corresponde al anexo técnico de la asamblea de ejidatarios de dos de julio de mil novecientos noventa y seis.

10. En audiencia que se llevó a cabo el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el señor LEOPOLDO PARRA ARJONA, en calidad de colindante de los terrenos cuya incorporación se ha solicitado por el núcleo

agrario promovente, declaró que por su parte no tiene problemas con las medidas, colindancias y linderos de sus terrenos con los que pertenecen al ejido (foja 189).

En esa misma audiencia declararon los señores FERMÍN LÓPEZ ESCOBEDO y J. JUAN AGUILAR ROMERO.

El primero de ellos dijo que en relación a la situación que guardan los terrenos achurados en el ejido, se ha dado cuenta que todo el tiempo se han considerado como parte de ese núcleo agrario, ya que son mucho los ejidatarios que desde hace más de cincuenta años que los poseen.

Indicó que con motivo de esa posesión no hay conflictos, ya que todo está sembrado de caña, maíz, zacate, esto último en lo que se conoce como terrenos de uso común.

A las preguntas que este tribunal le formuló, el señor FERMÍN LÓPEZ ESCOBEDO, respondió:

Que hace aproximadamente cincuenta años que diversos ejidatarios están en posesión de los terrenos cuya incorporación al régimen ejidal aquí se pretenden, que algunos tienen más y otros menos tiempo.

Que no sabe por qué razón tiene la posesión de esos terrenos, pues desconoce qué autoridad se los entregó.

Enseguida, el señor J. JUAN AGUILAR ROMERO, declaró que los terrenos cuya incorporación se pretende quedaron fuera del polígono cuando se llevaron a cabo las mediciones, pero el ejido lo tiene en posesión desde hace mucho tiempo.

Que por esa posesión no hay conflicto, ya que los terrenos se destinan a la siembra y al agostadero, y destacó que al interior hay delimitaciones de parcelas a favor de ejidatarios; que el terreno que aquí se pretende regularizar mide aproximadamente 360-00-00 hectáreas, y lo sabe porque en dos ocasiones ha sido parte del consejo de vigilancia.

A las preguntas que este tribunal le formuló, respondió que el ejido ya tiene bastantes años en posesión de esos terrenos, aunque ignora que autoridad se los entregó.

Como se aprecia, las declaraciones de los señores FERMÍN LÓPEZ ESCOBEDO y J. JUAN AGUILAR ROMERO, ponen de manifiesto que son aproximadamente 360-00-00 hectáreas las que se pretenden incorporar legalmente al régimen ejidal en beneficio del núcleo agrario, ya que desde hace más de cincuenta años que se ha considerado que esas tierras pertenecen a dicho ejido, pues distintos campesinos las destinan a las siembras de maíz, caña y zacate, además de agostaderos, todo ello sin que exista conflicto con sus colindantes.

El estudio a esta testimonial se sustenta en el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

11. En las hojas 202 a 213, obra el acta de asamblea de ejidatarios que se llevó a cabo el siete de agosto de dos mil dieciséis, por segunda convocatoria, de cuya lectura se sabe que el punto importante a tratar fue el autorizar al comisariado ejidal para que acudiera ante este Tribunal Unitario Agrario a solicitar la incorporación de tierras al régimen ejidal, particularmente en lo que se refieren a los terrenos clasificados o identificados como achurados que son un total de cinco polígonos, como a continuación se describen:

Polígono 1. Ubicado en zona urbana, mide 2-15-66.478 hectáreas.

Polígono 2. Ubicado en zona urbana y tiene una superficie de 00-61-02.068 hectáreas.

Polígono 3. Ubicado en zona urbana y tiene una superficie de 0-83-57.853 hectáreas.

Polígono 4. Ubicado en terrenos de uso común y tiene una superficie de 363-97-64.391 hectáreas.

Sometido a votación el caso, el resultado fue que la asamblea autorizó al comisariado ejidal para que hiciera las gestiones legales necesarias tendentes a la incorporación de esas tierras al régimen ejidal.

12. De la foja 214 a 236, obra el acta de asamblea por segunda convocatoria, que se llevó a cabo el veintinueve de marzo de dos mil quince, de cuya lectura se sabe que entre los puntos de la orden del día destaca el relativo a la elección del comisariado ejidal y consejo de vigilancia.

Para tal punto se registraron dos planillas, la de color verde y la de color rojo, y el resultado fue 86 votos a favor de la primera y 47 a la segunda, de manera que BERNABÉ RAMOS GARCÍA, JUAN MARTÍN ARCADIA CAMBERO y MA. PRISCILIA VARGA MILIÁN, resultaron electos como presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, con sus respectivos suplentes y también se eligieron a los propietarios de la presidencia y propietarios del consejo de vigilancia.

TERCERO. Con base en el estudio de los medios de prueba que anteceden, esta magistratura declara que es procedente y fundada la petición que formularon los señores BERNABÉ RAMOS GARCÍA, JUAN MARTÍN ARCADIA CAMBERO y MA. PRISCILA VARGAS MILIAN, presidente, secretario y tesorera del comisariado ejidal del núcleo denominado "Santa María del Oro", municipio de Santa María del Oro, Nayarit

Se estima de esa manera porque demostraron los hechos que narraron en la solicitud formulada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

En consecuencia, este tribunal declara que el ejido en comento tiene legítimo derecho a disponer, como parte de su patrimonio, de los terrenos identificados en los cinco polígonos antes descrito, de manera que forman parte de su propiedad, para los efectos que indica el artículo 9 de la Ley Agraria.

Ahora bien, para lograr la debida certeza y seguridad en la tenencia de esos terrenos, el comisariado ejidal deberá cumplir las siguientes obligaciones de hacer:

a) Llevará a cabo la medición de los terrenos que comprenden los cinco polígonos, con los instrumentos técnicos más adecuados, estación total o sistema de posicionamiento global (GPS).

b) Hará el caminamiento perimetral con el apoyo de ingeniero topógrafo, quien se encargará de elaborar el plano con los cuadros de construcción que ilustren gráficamente la ubicación, medidas, colindancias y superficie real de ese inmueble.

c) Una vez que se elabore el acta de esos trabajos técnicos de medición del terreno, así como el o los planos resultantes, entonces los presentará ante este tribunal agrario.

Enseguida, este tribunal comisionará a su perito topógrafo y al actuario de la adscripción para que proceda a poner en posesión legal y formal al núcleo agrario de los terrenos comprendidos en los cinco polígonos.

Ahora bien, si el ejido ya tiene perito contratado, entonces lo deberá hacer saber al tribunal para que sólo se le asigne un actuario.

Después de que el ingeniero y el actuario elaboren el acta correspondiente, y se apruebe por el núcleo agrario, será hasta entonces cuando se ordene la inscripción de esta resolución, del acta de ejecución y del plano definitivo que se elabore, ante el Registro Agrario Nacional y ante el Registro Público de la Propiedad del municipio de Santa María del Oro, Nayarit.

En la medida que no se cumplan las obligaciones de hacer que anteceden, esta decisión judicial no surtirá efecto alguno.

Desahogado lo anterior, se ordenará la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

Esta acción, en la práctica jurisdiccional de tribunales agrarios se le denomina incorporación de tierras al régimen ejidal, tomando en cuenta que los núcleos agrarios preexistentes a la reforma constitucional agraria de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, son propietarios de las tierras con las que fueron dotados, ya sea mediante dotación de ejidos o creación de nuevos centros de población ejidal; pero, también pudieron

o pueden adquirir otros terrenos posteriormente, y el artículo 9 de la Ley Agraria abre la posibilidad de que esos inmuebles también formen parte de su patrimonio, por ello la necesidad de la medición exacta de esos terrenos, pero sobre todo la conformidad de linderos que debe existir para evitar problemas de límites con terceras personas.

Se estima así, habida cuenta que esta magistratura tiene la obligación de proteger los intereses y derechos fundamentales del núcleo agrario promovente, como lo indica el artículo 165 de la Ley Agraria, además de proteger la propiedad sobre sus tierras, en los términos que indica el artículo 27, fracción VII, de la Constitución General de la República.

Ahora bien, si durante el cumplimiento de las obligaciones de hacer antes referidas se llegara a presentar algún problema con la tenencia de esos terrenos o por sus colindancias, esta decisión judicial no tendrá efecto alguno, pues podrá ser impugnada por quien tenga interés jurídico en ello mediante la vía y ante la autoridad que estime competente.

En efecto, la obligación positiva antes referida, es acorde con lo normado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el núcleo agrario que nos ocupa, como persona moral, como ente jurídico, goza de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en tratados internacionales; y este órgano jurisdiccional, está obligado a interpretar las normas de derecho conforme al principio por persona, buscando siempre la protección más amplia de esos derechos humanos, como en este caso es la propiedad de terrenos en beneficio del citado núcleo, para con ello respetar, proteger y garantizar su vigencia.

Finalmente, no para de inadvertido considerar que el artículo 9 de la Ley Agraria, indica que los núcleos de población ejidales o comunales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.

La interpretación teleológica de este precepto (la finalidad que busca), arroja que los núcleos agrarios tienen la posibilidad de adquirir por otras vías, que no sean las de dotación de tierras o ampliación de ejidos, terrenos u otros bienes, como puede ser la compraventa, donación o por posesión calificada de terrenos.

En este caso, está claro que el ejido de referencia por muchos años ha tenido la posesión de los terrenos que se ilustran en los cinco polígonos ya mencionados, de manera que esta magistratura no encuentra impedimento legal ni material para decidir que ese terreno debe formar parte de su propiedad, a partir de que la posesión ha sido lícita, pero sobre todo sin causar perjuicios a terceras personas y sin contravenir disposiciones del orden público.

Son estas razones específicas por las que esta magistratura agraria estima justo que el núcleo agrario incorpore a su régimen ejidal el terreno antes mencionado.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 189 de la Ley Agraria, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara procedente y fundada la petición formulada por los integrantes del comisariado ejidal del poblado denominado "Santa María del Oro", municipio de Santa María del Oro, Nayarit.

SEGUNDO. Se declara que el mencionado núcleo agrario tiene derecho a disponer, como parte de su patrimonio, de los terrenos comprendidos en los cinco polígonos, atento a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión judicial.

TERCERO. Una vez que el comisariado ejidal cumpla con las obligaciones de hacer impuestas en esta decisión, se ordenará su inscripción ante el Registro Agrario Nacional y ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del municipio de Santa María del Oro, Nayarit.

CUARTO. El perito topógrafo y el actuario de este tribunal, deberán cumplir con lo ordenado en la parte considerativa de esta decisión judicial.

QUINTO. Cumplido lo anterior, se ordenará la publicación de esta decisión judicial en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEXTO. Notifíquese personalmente esta resolución a las partes y una vez que se cumpla en sus términos, se ordenará el archivo definitivo del expediente.

Tepic, Nayarit, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.- Así lo resolvió y firma el doctor en derecho **Aldo Saúl Muñoz López**, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56, ante el licenciado en derecho **José de Jesús Escalante Oliva**, Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe. Cúmplase.- Rúbricas.